

Capítulo 3

Huaycán combativo: la resistencia urbana a la insurgencia senderista

LUCÍA LUNA-VICTORIA INDACOCHEA

Introducción

Localizado en el kilómetro 17 de la carretera Central, Lima, el Proyecto Especial de Habilitación Urbana del Área de Huaycán (PEH), mejor conocido solo como Huaycán, se creó durante un momento fugaz de la historia contemporánea. El proyecto, emanado de la demanda popular por una vivienda digna y propia, se concretó con la llegada a la municipalidad de Lima Metropolitana de la Izquierda Unida (IU), un frente de partidos leninista, trotskista y maoísta. El PEH significó la creación de un proyecto socialista con el propósito de beneficiar a los sectores de bajos recursos en las periferias de Lima, aquellos sin propiedad ni acceso a crédito, al igual que se propuso ser un programa de vivienda ordenado.¹

Alfonso Barrantes Lingán, el primer alcalde de izquierda de Lima Metropolitana (1983-1985), se reunió con los pobladores de los asentamientos humanos, predominantemente de los distritos de Ate-Vitarte y El Agustino, y con el arquitecto

1. La creación de Huaycán ha sido examinada en detalle en otras ocasiones; véase Gyger 2019, Luna-Victoria Indacochea 2022 y Smith 1992.

Eduardo Figari Gold, miembro de Vanguardia Revolucionaria,² para ejecutar las demandas de los sectores más pobres. Figari fue asignado como representante municipal en el PEH, y fue él quien propuso un diseño que respondía a la crisis de vivienda y pobreza en la ciudad. La respuesta consistió en una comunidad urbana planificada, en donde los pobladores trabajarían de la mano de urbanistas y técnicos municipales para crear un modelo de desarrollo ordenado y progresivo. El proyecto se decretó el 3 de mayo de 1984 y la ocupación del terreno se hizo el 15 de julio del mismo año.

El conflicto armado interno que vivía el país desde 1980 estaba concentrado hasta ese momento en el centro sur andino. En Lima, el Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso buscaba posicionarse infiltrando los sindicatos donde la izquierda tenía una presencia predominante. Durante la planificación y ocupación de Huaycán, en 1984, Sendero no estuvo presente; los conflictos más visibles eran entre los militantes de IU. Por ejemplo, Patria Roja, integrante maoísta de la IU, lideró invasiones a través de la asociación de vivienda Horacio Zepallos, con el propósito de ganar simpatizantes, sin considerar los requisitos del proyecto. Consecuentemente, los intentos de invasión resultaron en una serie de batallas campales, donde los pobladores buscaban mantener el control y la planificación de Huaycán propuesta por los técnicos municipales y dirigentes de asociaciones, principalmente de Vanguardia Revolucionaria. Recién al cumplirse un año de la ocupación, aparecieron los senderistas, quienes amenazaron a los arquitectos de la IU y atacaron al proyecto municipal llamándolo “revisionista.”

Este capítulo examina la construcción de la Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán (CUAH) durante los años del

2. Vanguardia Revolucionaria, partido marxista creado en 1965, fue uno de los fundadores de la IU en 1980.

conflicto armado interno y traza las batallas de sus dirigentes por la autogestión comunal y resistencia urbana contra la violencia política de Sendero Luminoso y del Estado peruano. La resistencia urbana en Huaycán se caracterizó por la lucha política contra Sendero y la legitimación de las propuestas de desarrollo urbano progresivo. Fue una resistencia basada en la lucha colectiva de los pobladores para lograr el desarrollo urbano en el asentamiento, una lucha que se desplegó a través de la alianza entre los pobladores y la IU, y después entre los pobladores, las ONG, la Iglesia católica y el Estado. No fue, en un principio, una resistencia militar. Solo al enfrentarse a la presencia de las Fuerzas Armadas y ante el riesgo de perder la autonomía del asentamiento, los dirigentes fueron forzados a negociar la creación de grupos armados y de inteligencia dentro de Huaycán. Los protagonistas de esta historia son los dirigentes combativos de la CUAH.

La batalla por la defensa y construcción de la comunidad urbana de Huaycán tuvo dos grandes etapas. La primera (1985-1990) abarca el periodo en el que Huaycán se convirtió en un campo de batalla entre el gobierno aprista, IU, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y Sendero Luminoso. La lucha por su desarrollo fue clave para ganar el apoyo de la comunidad de parte de los partidos e insurgentes; sin embargo, las propuestas de cómo obtenerlo divergían; entre ellas el desarrollo progresivo de la IU, la colaboración con el Estado aprista y la lucha armada. Dentro de esta batalla política destacaron las acciones de los dirigentes de Huaycán para definir el carácter de su comunidad más allá de los partidos políticos. Estas acciones incluyeron las batallas dentro de asambleas populares, las marchas por servicios básicos y la creación de la CUAH.

La segunda etapa (1990-1996) corresponde a un momento en que los dirigentes deciden enfrentarse abiertamente a Sendero, convertido en una amenaza para la estructura comunal. Este giro empieza con la elección de Pascuala Rosado Cornejo como

secretaria general de Huaycán en 1991 y el enfrentamiento político de su junta directiva contra Sendero. Los dirigentes de Huaycán se propusieron combatir a Sendero a través de obras públicas en la comunidad. Sin embargo, la victoria electoral de Alberto Fujimori y la estrategia de contrainsurgencia urbana cambió el rumbo de la resistencia civil en Huaycán. El régimen cooptó a los comités de autodefensa existentes y creó rondas urbanas contra Sendero en 1992. Esta intervención del Estado transformó las dinámicas de aceptación, tolerancia y resistencia civil. De esta forma, la colaboración con el Estado convirtió a los dirigentes y ronderos en los blancos principales de asesinatos selectivos de los senderistas, una estrategia de odio que permaneció años después de la captura de Abimael Guzmán en 1992.

En mis entrevistas, los dirigentes de Huaycán comparten una narrativa de una lucha colectiva para preservar la participación y agencia de los pobladores en contra de aquellos que buscaban eliminarlos. Ellos recuerdan haber confrontado el caos anárquico de las izquierdas y el clientelismo del APRA durante la segunda mitad de los ochenta. Los testimonios evidencian que la presencia de Sendero en Huaycán fue inicialmente externa y luego política. No obstante, la evidencia de lo que realmente fue Sendero en Huaycán es parcial y limitada a su mención en testimonios, archivos policiales y periódicos. En los primeros años, Sendero irrumpía en las asambleas con destacamentos armados y propaganda, y consiguió formar parte del esquema político de la comunidad. En los años noventa, Sendero logró expandirse dentro de las zonas de Huaycán, llegando a tener control en las partes altas del asentamiento.

Mientras la narrativa de los dirigentes enfatiza que Sendero nunca controló la directiva central de Huaycán, sí alude a cierto control, mayormente en zonas que se crearon después de la planificación inicial del asentamiento. Esta narrativa no permite saber a cabalidad si hubo dirigentes en la directiva central que simpatizaron con Sendero; sin embargo, un dirigente central fue

arrestado por sus vínculos con el MRTA. Igualmente, mientras la mayoría de los dirigentes mencionaron haber formado parte de Vanguardia Revolucionaria, hubo algunos miembros de otros partidos, como 14 de Junio, creado a principios de los años ochenta, que tuvo vínculos con Sendero. Sin embargo, fueron las acciones de dirigentes de Huaycán durante estos años las que finalmente superaron el plan de los senderistas de crear un comité popular abierto en Huaycán, una victoria que los forzó a fundar un asentamiento alternativo, Raucana, en 1990. Este capítulo ilustra la resistencia del pueblo de Huaycán en defensa de la autogestión, el orden interno y el desarrollo progresivo en el contexto de la insurgencia senderista y la contrainsurgencia estatal.

Las políticas combativas en Huaycán, 1985-1990

Desde su creación, Huaycán se consolidó como un espacio político heterogéneo. Los partidos políticos y movimientos insurgentes buscaban crear alianzas con los pobladores, proponiendo solucionar las necesidades más urgentes a cambio de su apoyo electoral o como combatientes. En este contexto, Huaycán logró ser una cuna de ideologías de izquierda guiadas por una visión de crear un espacio urbano capaz de brindar una mejor calidad de vida, así como promover la participación colectiva de sus pobladores. En 1985, el censo de Huaycán, realizado por el municipio y las ONG Ideas y Cidap, señaló que, al cumplirse un año de la creación del proyecto, casi el 90% de beneficiarios habían sido familias de bajos recursos provenientes de los asentamientos de Lima Este, de los cuales el 60% había nacido en Lima (Figari Gold 1987: 106). La población estaba conformada por 17.264 individuos y 4316 unidades familiares. Los pobladores fueron relativamente jóvenes: 84,3% tenían menos de 35 años y 49% menos de 18 (Figari Gold 1987: 106). En cuanto a su ocupación, 31,69% eran obreros, 22,72% empleados y 31,81%

trabajadores independientes. Cerca del 60% de los pobladores laboraba a lo largo de la carretera Central, y solo 7,46%, unas 1287 personas, trabajaba en Huaycán (Figari Gold 1987: 106). La población de Huaycán bordeaba los 50.000 habitantes en 1989,³ un reflejo de lo que pasaba en Lima Metropolitana, que creció de 4.608.010 habitantes en 1984 a 6.345.856 en 1993.⁴

Al asumir el poder en 1985, el gobierno de Alan García buscó solucionar las desigualdades económicas y sociales que promovían el apoyo a grupos insurgentes. El partido aprista creó una agenda para combatir la deuda externa, la inflación y la insurgencia. A diferencia de su antecesor, García reconoció las raíces históricas de la insurgencia de Sendero, incluido el abandono estatal del campesinado y el encarcelamiento injusto de izquierdistas y opositores políticos. El gobierno buscó incorporar a los sectores urbanos pobres a la economía formal y la fuerza laboral, así como reducir las restricciones al acceso al capital y crédito (Graham 1991: 97). El programa principal fue el Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (PAIT).⁵ Para los pobladores de Huaycán, el enfoque de los apristas en relación con los sectores urbanos pobres prometió remediar el empeoramiento de las condiciones económicas y la calidad de vida. El primer secretario general en Huaycán, elegido en elecciones universales, fue el aprista Raúl Rodríguez. A través del PAIT, el APRA logró reclutar con éxito a nuevos miembros del partido,

-
3. “El ensayo de Raucana”. Carlos Iván Degregori, *Quehacer*, n.º 73: 30 (Lima: septiembre-marzo 1991).
 4. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Censo de 1993. Disponible en: <<https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/>>.
 5. El PAIT se propuso brindar trabajo comunitario a los sectores más pobres, particularmente mujeres. Muchas veces los trabajadores del PAIT tenían que afiliarse al APRA para participar o renunciar a su participación en comedores populares creados por la IU.

determinar su lealtad a la organización y al presidente e imponer una identidad partidaria sobre una identidad comunitaria.

Tras la victoria del APRA, Sendero Luminoso buscó deslegitimar a los apristas y reforzar el impulso de su guerra popular en la ciudad. En 1986, Abimael Guzmán “definió que la tarea fundamental del Partido era ‘desenmascarar’ al APRA, quitarle la careta progresista” y finalmente “inducir[los] al genocidio” (CVR 2003, II: 61). La estrategia de Guzmán respondía a las crecientes derrotas de Sendero en Ayacucho, donde la contrainsurgencia había logrado el apoyo de las rondas campesinas. A pesar de la pérdida de impulso en el centro sur andino, o por eso mismo, Sendero priorizó el desarrollo de su guerra popular en los asentamientos humanos de Lima, desplegando un intenso trabajo de proselitismo entre los pobladores de asentamientos humanos (CVR 2003, II: 65).

De 1980 a 1983, Sendero percibió la capital como una caja de resonancia donde cualquier acción alcanzaba la atención nacional e internacional y, como consecuencia, magnificaba su insurrección. Sendero creó una estrategia basada en una serie de Grandes Planes Militares, que implicó mantener una presencia clandestina por el tiempo suficiente para que el movimiento maoísta controlara las principales entradas a la capital, incluida la carretera Central, proveedora clave de alimentos para la ciudad.⁶ El objetivo era “asfixiar la ciudad” y, en última instancia, aislar el centro de poder, lo que aceleró el trabajo de inteligencia existente y transformó a la capital en un campo de batalla. El tercer Gran Plan (mayo 1983-septiembre 1986) buscaba extender su mensaje en los asentamientos humanos y las fábricas

6. Planes militares: Inicio (mayo-diciembre 1980), El Despliegue de la Guerra de Guerrillas (enero 1981-enero 1983), La Conquista de Bases de Apoyo (mayo 1983-septiembre 1986), El Desarrollo de Bases de Apoyo (marzo 1987-septiembre 1988) y Desarrollo de Bases de Apoyo a partir de la Conquista del Poder (agosto 1989-agosto 1992).

de la periferia de Lima. Para lograr este objetivo, el partido desarrolló el “Gran Salto”, que iniciaría en junio de 1984. Este salto consistió en la militarización de sus contingentes urbanos y cinco estrategias guerrilleras: sabotaje, asesinatos selectivos, agitación, propaganda y paros armados. Los contingentes urbanos de Sendero, el Comité Metropolitano y Socorro Popular ejecutaron el nuevo plan.

El Comité Metropolitano fue compuesto por “la célula de dirección y tres zonales: Este, Oeste y Centro” (CVR 2003, II: 59). Dentro del Comité Metropolitano, el salto significó “una nueva etapa de captación de masas en los asentamientos humanos, urbanizaciones populares, tugurios y fábricas”; por ejemplo, las empleadas de hogar fueron un grupo crucial, ya que “podían ser buenas informantes” (CVR 2003, II: 60). La zonal Este funcionó en los distritos de Ate-Vitarte, El Agustino y San Juan de Lurigancho. En Huaycán, Sendero desarrolló una red de simpatizantes en una subzona de la zonal Este, incluidos los compañeros “Teófila”, “Carlos” y un médico que vivía a dos cuadras de la calle principal de Huaycán.⁷

El segundo contingente, Socorro Popular, operó como una extensión clandestina de la Asociación de Abogados Demócratas y el Comité de Presos Políticos y sus Familiares.⁸ Socorro Popular también creó contingentes en las zonales de Lima. La zonal Este, que incluyó las fábricas de la carretera Central y Huaycán, fue considerada el “eje más importante para sus acciones terroristas”.⁹ Socorro Popular amplió su base a través de

-
7. Dircote, PNP, atestado 78: 74-80, tomo 18 (1998).
 8. De 1981 a 1985, Socorro Popular “cumplió tareas de asistencia médica, asesoría legal y en ocasiones difundió denuncias y agitación verbal o escrita a favor de los detenidos de Sendero Luminoso” (Jiménez Bacca 2000: 543).
 9. Socorro Popular fue encabezado por la abogada Yobanka Pardave Trujillo, conocida clandestinamente como “Olga” o “Sarah.” Pardave entró en la clan-

sus redes de militantes encarcelados y familiares. Este método de reclutamiento es evidente en los expedientes judiciales del presunto terrorista Leoncio C. T., un menor de 16 años, y los de sus hermanos.¹⁰ Al ser interrogados por la policía en diferentes momentos, Leoncio y su hermano Bartolomé confesaron que su reclutamiento empezó con las visitas a su hermana Lucila en el penal de Santa Mónica.¹¹ Los hermanos asistieron a las escuelas populares dentro del penal y luego se les dio un enlace en el exterior. En el caso de Leoncio, la compañera “Julia” le encargó varias acciones, entre ellas la entrega de explosivos a contactos en Huaycán. En julio de 1985, la policía lo detuvo y torturó junto a varios otros presuntos terroristas. Bartolomé, sin embargo, se integró al contingente zonal Este del Comité Metropolitano, donde realizó propaganda y acciones armadas entre 1985 y 1989.¹² A pesar de las detenciones, Socorro Popular creció de manera explosiva fuera del alcance de las autoridades (Jiménez Bacca 2000: 546).

La vida cotidiana de los pobladores en Huaycán fue impactada por la escala de acciones senderistas en la ciudad. El servicio de inteligencia del Estado atribuyó este aumento al “desarrollo de las Comisiones Locales” del Comité Metropolitano.¹³ Una de las primeras acciones senderistas en Huaycán fue el secuestro de buses de la compañía Enatru, un medio de transporte fundamental

destinidad y se volvió fundamental en la militarización de Socorro Popular a partir de 1986 y la creación del Movimiento Revolucionario en Defensa del Pueblo (MRDP), consolidado en 1987 (Jiménez Bacca 2000: 556).

10. Dircote, PNP, atestado 45 (1985). Expedientes judiciales de varios juicios a presuntos terroristas. Colección Gustavo Gorriti, caja 6. Princeton, Universidad de Princeton.
11. Dircote, PNP, atestado 78: 74-80, tomo 18 (1998).
12. Ibíd.
13. “Nota de Inteligencia n.º 65”, Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Presidencia de la República. Lima, 7 de octubre (1986). Colección Gustavo Gorriti, caja 9. Princeton, Universidad de Princeton.

para los pobladores, y la difusión de panfletos propagandísticos titulados “El desarrollo de la Guerra de Guerrillas” en la calle principal de Huaycán.¹⁴ El 25 de julio de 1986, ocurrió el primer asesinato selectivo de un líder político en Huaycán por parte de Sendero.¹⁵ La Dircote atribuyó el asesinato de Andrés Tapia Murillo a un escuadrón de aniquilamiento, y se esclareció que fue parte de una ola de asesinatos selectivos contra líderes apristas en respuesta a las masacres en los penales en junio de 1986.

Tapia empezó a militar en el partido aprista antes de mudarse a Huaycán, y su trabajo como dirigente local del PAIT le brindó reconocimiento en el asentamiento. Antes de asesinarlo, Sendero lo amenazó con mensajes en busca de venganza por las masacres, e incluso en una ocasión prendieron fuego a su casa. La muerte de Tapia dejó a María Martínez de Tapia, militante aprista y trabajadora del Club de Madres de Huaycán, viuda y con ocho hijos. Martínez pidió en vano protección de la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones, y declaró a los medios que “esta zona es muy peligrosa e infestada de subversivos. Por eso es que pedimos protección para nosotros los dirigentes apristas”.¹⁶ Sendero justificó el asesinato de líderes locales como justicia popular contra la corrupción. En Huaycán se sabía que ciertos dirigentes varones del PAIT manipulaban a las trabajadoras del programa y las obligaban a brindar favores sexuales.¹⁷ Fue este comportamiento y la falta de respuestas a los reclamos lo que alimentó el descontento con la dirección local del APRA y creó simpatías con la retórica de justicia popular de Sendero.

14. Dircote, PNP, atestado 78: 74-80, tomo 18 (1998).

15. “Terror en el arenal”. Policial, pp. 16-17. *La República*. Lima, 27 de julio de 1986.

16. Ibíd., p. 17.

17. Pedro Arévalo. Entrevista con la autora. Zoom, 4 de febrero de 2021.

Como respuesta al asesinato de Tapia y a las acusaciones contra el secretario general Rodríguez por conducta indecente, los pobladores organizaron el Segundo Congreso de Pobladores de Huaycán en agosto de 1986. Para el dirigente y fiscal local Pedro Arévalo, miembro de Vanguardia Revolucionaria, la dirección aprista en Huaycán trabajó activamente para socavar lo que había puesto en marcha la IU y el comité de gestión desde la creación del PEH. De hecho, fue Arévalo quien descubrió a Rodríguez en circunstancias comprometedoras que involucraban a una mujer. A raíz de estos sucesos, el Congreso de Huaycán convocó a los delegados de las UCV (Unidades Comunales de Vivienda) para escoger una nueva dirigencia luego de eliminar las elecciones universales acordadas anteriormente. Walter Ortega asumió el cargo de secretario general en 1986, y aseguró nuevamente el control de la IU en Huaycán. Sin embargo, la victoria de los apristas en las elecciones municipales fortaleció su control de la ciudad y comprometió el desarrollo de Huaycán, visto como un proyecto emblemático de sus rivales políticos.

Tras la llegada del aprista Jorge del Castillo a la alcaldía de Lima Metropolitana en 1987, Huaycán dejó de ser un proyecto especial del municipio. El dirigente David Porras, hijo de migrantes de Tarma y nacido en Santa Clara, uno de los centros poblados más antiguos de la carretera Central, fue testigo de la disolución del proyecto de vivienda: “Todos los equipos que tenía [el proyecto], por ejemplo, en la oficina técnica de Huaycán, empiezan a desaparecer [...]. Los recursos que estaban y los materiales, todo eso perdieron”.¹⁸ El equipo técnico que guío la planificación de los lotes, compuesto por los arquitectos Eduardo Figari Gold, Carlos Roel, Reynaldo Ledgard, Linda Zilbert y Silvia de los Ríos, también fue eliminado. Lo que estaba en juego para la sobrevivencia de la comunidad era resguardar la

18. David Porras. Entrevista con la autora. Lima, 20 de diciembre de 2019.

participación de los pobladores. En un pueblo sin electricidad ni agua potable, los pobladores dependían unos de otros para sobrevivir. La nueva directiva de IU buscó mantener el componente democrático en la comunidad, pero se enfrentó al antagonismo aprista, y el descontento generó la radicalización de algunos pobladores.

Al perder el favor del gobierno, Huaycán se convirtió en el foco de varias intervenciones de las fuerzas del orden. De 1986 a 1988, el gobierno aprista emitió veinte decretos de estado de emergencia en Lima, que justificaron la represión en los asentamientos humanos. Dos operaciones en 1986 y 1987 resultaron en el arresto de seiscientas personas, e ilustraron el interés de la policía y las Fuerzas Armadas de tratar a Huaycán como zona roja.¹⁹ La operación del 18 de marzo de 1987 tuvo como objetivo capturar a las células terroristas responsables de un ataque a los militares, y los policías arrestaron a estudiantes, amas de casa, dirigentes populares, adolescentes borrachos y vagabundos (Desco 1989: 342). Otro factor que legitimó la represión fue el racismo en relación con los desplazados de la violencia que llegaron en gran número a Huaycán a partir de 1987.²⁰ La estigmatización de estas personas contribuyó a la denominación de Huaycán como zona roja. Cualquiera sin documentación fue arrestado, lo que agregó un elemento de terror a las nuevas medidas de la contrainsurgencia. El ambiente de inseguridad que envolvía a Lima evidenció la creciente presencia de Sendero en la capital.

-
19. "Ahora rastillajes". *El Amauta*, p. 5. Lima, 4 de septiembre 1986.
 20. La trayectoria de las personas desplazadas en Huaycán ha sido estudiada por el antropólogo Iván Ramírez Zapata (2017) y documentada por las fotógrafas Käthe Meentzen y Vera Lentz. Disponible en: <<https://www.verdadyreconciliacionperu.com/fotos/fotosListado.aspx?O=Autor&A=LENTZ,%20Vera>> (última consulta: 15/09/22).

La junta directiva de IU en Huaycán contrarrestó el sabotaje a la participación popular por parte del APRA y Sendero, y reforzó la autogestión comunitaria. Estos esfuerzos se formularon como respuesta colectiva a la crisis económica, una situación que no conocía límites partidarios y amenazaba la supervivencia de los pobladores en Huaycán. Una acción emblemática en la historia de Huaycán ocurrió el 26 de marzo de 1987, cuando dirigentes organizaron una marcha hacia el centro de la ciudad con la intención de hacer conocer los agravios que soportaba la comunidad al presidente. Los pobladores obtuvieron un permiso de la ciudad para congregarse y entrar a la plaza frente a Palacio de Gobierno. Los medios de comunicación elogiaron la marcha como una movilización pacífica, y no se reportó ninguna actividad subversiva. Más bien, la cantidad de personas en la marcha, miles según la cobertura en los medios, ilustró la capacidad organizativa de los dirigentes de Huaycán. Los pobladores lograron resolver una disputa con Sedapal (empresa de agua potable y alcantarillado): se atribuyó la victoria a la comunidad, y no a un solo partido.

El mismo año, los pobladores de Huaycán convocaron al Primer Congreso Estatutario. Dos bandos ideológicos predominaron en el cónclave: los que apoyaban una comunidad autogestionaria y los que preferían mantener la Asociación de Pobladores. La comunidad autogestionaria, semejante a la Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa El Salvador, fue impulsada por dirigentes de IU. Por otro lado, los que preferían mantener la asociación incluían al dirigente Jaime Lastra Domínguez, quien explicó: “Si entendemos la autogestión como una forma democrática, tomar decisiones, reclamar, tramitar, eso se puede dar. Pero los compañeros de Izquierda Unida planteaban que debía ser [...] un nuevo poder, un nuevo gobierno”.²¹

21. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 18 de enero de 2020.

De 300 pobladores, 220 votaron a favor de la denominación Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán (CUAH).²² En protesta, Sendero interrumpió el congreso con un contingente de veinte miembros armados para intimidar a la comunidad. El dirigente Pedro Sulca Chacón recordó que “[Sendero] quemó todos los papeles, los acuerdos que se habían aprobado en ese momento y nos obligó a gritar Viva la Guerra Popular”.²³ La creación de la CUAH reiteró el deseo de autonomía de la comunidad frente al cambio de partidos políticos y la escalada de violencia del conflicto armado. Sulca concluyó que “nosotros lo hicimos [...] por una necesidad de derrotar política e ideológicamente a Sendero en Huaycán”.²⁴ El voto a favor de la CUAH fue el primer desafío abierto a Sendero por parte de los dirigentes.

El 17 de febrero 1988, los pobladores de Huaycán marcharon nuevamente hacia Palacio de Gobierno con el fin de reclamar contra el abandono estatal y la ineficiencia de las autoridades. Para Sulca, militante de IU y organizador de la marcha, se trataba de ejercer sus derechos. La movilización derivó a las demandas de sobrevivencia: “El pueblo necesitaba agua, necesitaba electrificación, necesitaba movilidad, necesitaba abastecimiento”.²⁵ Los dirigentes de Huaycán planearon la marcha a lo largo de varias semanas.

Sendero, a través de su periódico *El Diario*, apoyó la decisión de los líderes de Huaycán de marchar. La cobertura antes de llevarla a cabo reiteró que la liberación de los dirigentes detenidos fue la causa principal de la movilización, además de las necesidades básicas. Tres días antes de la marcha, *El Diario* citó

-
22. Pedro Sulca Chacón. Entrevista con la autora. Lima, 17 de diciembre de 2019.
 23. Ibíd.
 24. Ibíd.
 25. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 7 de diciembre de 2019.

al secretario general de Huaycán, Walter Ortega, quien aseguró que la marcha serviría para denunciar la represión y los rastri-llajes en Huaycán, y exigió la “libertad inmediata de los socios Máximo Ayala Sayar y Abraham Guisado, quienes han sido acu-sados de ‘terroristas’”.²⁶ El día de la marcha, *El Diario* destacó la demanda de las mujeres y citó a Edith Povis, madre de seis hijos y presidenta de la zona A: “No pedimos limosnas, sino la solu-ción y el respeto a nuestros derechos, así como la satisfacción de nuestras necesidades básicas [...]; a nosotros, por reclamar agua, luz y escuelas, nos llaman terroristas”.²⁷ La cobertura revela la cooptación de las demandas de Huaycán por parte de Sendero.

Los dirigentes de Huaycán discreparon sobre cómo plani-ficar la marcha hasta Palacio de Gobierno, en el centro de la ciudad. Los pobladores, según Sulca, tenían justificación para solicitar un permiso para marchar, pero fue denegado. “Si sus-pendíamos la marcha [Sendero] acusaba de traición a la marcha [...] porque si nosotros hubiéramos suspendido, de repente hu-biéramos perdido el liderazgo sobre la gente”, explicó Sulca.²⁸ Sendero presionó a la población para que siguiera adelante con la marcha y envió una directiva a su contingente urbano para que participara en ella.²⁹ Los dirigentes se vieron obligados a proteger los intereses Huaycán, pero ahora se enfrentaban a un gobierno hostil y a un Sendero que buscaba cualquier oportuni-dad para cooptar la marcha. Los dirigentes zonales de Huaycán reunieron a los pobladores afuera del hospital Dos de Mayo y marcharon hacia la Plaza de Armas con el propósito de controlar

-
26. “Pobladores de Huaycán harán marcha de protesta”, *El Diario*, p. 5. Lima, 14 de febrero de 1988.
 27. “Huaycán se moviliza por agua, luz y transporte”. *El Diario*, p. 14. Lima, 17 de febrero de 1988.
 28. Pedro Sulca Chacón. Entrevista con la autora. Lima, 17 de diciembre de 2019.
 29. Dircote, PNP, atestado 78: 74-80, tomo 18 (1998).

la protesta y establecer que se trataba de una demanda por servicios básicos. No obstante, durante la marcha Sendero detonó dos explosivos creando caos y comprometiendo a los pobladores con su lucha popular. Cientos fueron arrestados y heridos, mientras un poblador, Rafael Flores Echevarría, murió al ser atropellado por un rochabús.

La cobertura de los medios centristas y de derecha alimentó la percepción de Huaycán como un bastión terrorista. Los titulares después de la marcha, como “Huaycán rojo”, de *Caretas*, justificaron la cautela de las autoridades en relación con Huaycán. “Sendero ganó políticamente porque para la prensa el tema de las reivindicaciones quedó en segundo plano [...] pusieron como que Sendero condujo esa marcha”, recordó Sulca.³⁰ La presencia de Sendero en la marcha, lejos de ser un invento de los medios alarmistas, ilustró la amenaza que representaba para que los dirigentes mantuvieran el control de la comunidad.

Las concesiones obtenidas tras la marcha reiteraron el poder de la movilización popular. *El Peruano*, diario oficial del Estado, publicó el compromiso del presidente de cumplir con las demandas de Huaycán (CVR 2003, V: 430). En las áreas consolidadas de Huaycán, zonas A-G, se atendieron las exigencias de electrificación y agua, en su mayoría en la instancia burocrática. Los residentes seguían siendo responsables de financiar sus servicios, muchas veces apoyados por ONG y la Iglesia. A pesar de lograr las demandas, la represión a los pobladores por parte de la policía, el oportunismo de Sendero y el vilipendio de los medios disuadieron la movilización colectiva como herramienta del pueblo. Igualmente, Sendero intentó hacer de la muerte de Flores Echevarría un grito de guerra popular. Sin embargo, la mayoría de los pobladores de Huaycán la interpretaron como un

30. Pedro Sulca Chacón. Entrevista con la autora. Lima, 7 de enero de 2020.

sacrificio por el desarrollo de Huaycán y lo convirtieron en “el primer mártir de Huaycán”.

La escala de acciones de Sendero en Huaycán se debió a la estrategia propuesta durante el “Primer Congreso del Partido Comunista del Perú” 1988-1989 y el despliegue del cuarto Gran Plan. Este consistió en el “desarrollo de bases de apoyo” que “[organizó] el trabajo de las masas” y fusionó las operaciones de las distintas ramas en Lima (Movimiento Revolucionario del Pueblo, Comité Metropolitano, Socorro Popular) (CVR 2003, II: 81). Sendero realizó 63.052 acciones en tres años, principalmente de propaganda (“desfiles de jóvenes militantes, fogatas en los cerros, volanteos en los mercados”) en los asentamientos humanos (CVR 2003, II: 83). La proclamación de un “equilibrio estratégico” durante el Congreso confirmó una nueva fase militar basada en el exceso de confianza del partido y la invasión simbólica de la capital. La nueva estrategia presionó a las ramas locales para aumentar sus acciones a pesar de la reducción de los contingentes y las victorias de la contrainsurgencia en la sierra.³¹

En Huaycán, la presencia de Sendero, la represión del Estado y el shock económico de 1988 devastaron la calidad de vida de los pobladores y llevaron a la organización del Tercer Congreso del Pueblo en marzo 1988 (Butteler 1997: cap. 9). La IU, el APRA y los “radicales” se enfrentaron por la dirección central de Huaycán (Butteler 1997: cap. 9). El congreso concluyó en la elección de Juan Lara Casabona como secretario general, quien luego sería arrestado por sus vínculos con el MRTA, lo que

31. El MRTA continuó con sus acciones en toda la capital y amplió su presencia en la región de San Martín y la sierra central. En Huaycán, el MRTA se restringió a usarlo como “dormitorio”, donde los militantes pasaban la noche y se reagrupaban luego de movilizarse dentro y fuera de la capital. Sin embargo, el MRTA llevó a cabo acciones notables, como el robó de cuatro buses de la empresa Enatru cerca de la entrada de Huaycán. Por lo tanto, la presencia del MRTA también aumentó la represión policial y militar en Huaycán (Desco 1989: 218).

agravó la presión sobre los dirigentes de IU para enfrentar tanto la represión militar como la infiltración de Sendero. Al perder a su secretario general, los dirigentes interinos, quienes tenían poca experiencia, fueron presionados por los maoístas para que organizaran una nueva marcha. Los dirigentes de IU lograron evitarla a través de un pleno, y quedó claro que nuevas elecciones serían necesarias para mantener el control de Huaycán (Arévalo 1997: 70). A finales de 1989, los dirigentes convocaron el “Cuarto Congreso del Pueblo” y aseguraron el retorno de la democracia directa en las elecciones de la dirección central. El resultado fue una victoria para el APRA (Arévalo 1997: 70). El triunfo aprista creó conflictos con los dirigentes de IU, que resultaron en confusión y una crisis de legitimidad para los dirigentes. El conflicto obligó a crear un Pleno Popular donde estos eligieron una dirección central provisional a cargo de Luis López Fernández (Arévalo 1997: 70).

Sendero aprovechó la crisis de liderazgo para cuestionar la legitimidad del modelo de autogestión, y en varias ocasiones afirmó el compromiso de Huaycán con su lucha armada.³² Sendero calificó la creación de la CUAH como una tesis revisionista e impulsó acciones que desafiaron al comité central de Huaycán.³³ En junio de 1989, *El Diario* exaltó la decisión de la asamblea de la zona E de rechazar “el planteamiento de grupos revisionistas de IU que tratan de imponer la rechazada electrificación del A. H. mediante el sistema de autogestión”.³⁴ La zona E de Huaycán se autodenominó como la “zona E combativa”.³⁵ Los maoístas también aprovechaban el caos para realizar acciones

32. “Se abre una nueva etapa en el movimiento barrial”. *El Diario*, pp. 8-9. Lima, 24 de mayo de 1989.

33. Ibíd. “Habitantes de Huaycán: deslindaron con el revisionismo”. *El Diario*, p. 10. Lima, 14 de junio de 1989.

34. Ibíd.

35. Clímaco Condori. CVR, testimonio n.º 020401001000001.

que atendían las necesidades inmediatas de la población. En febrero de 1989, Sendero organizó a pobladores de Huaycán y zonas aledañas para robar las cosechas de papa, maíz y hortalizas del terrateniente italiano Poppe.³⁶ Documentos internos del partido afirmaron que “la acción de levantamiento de cosecha en Huaycán fue culminada con éxito. Hubo una amplia participación de las masas, organizadas bajo el liderazgo del Partido, a través del EGP [ejército guerrillero popular]” (CVR 2003, V: 433). A pesar de que Sendero criticó el “revisionismo” de IU y el modelo de autogestión, nunca brindó una alternativa para obtener servicios básicos o asegurar la sobrevivencia a largo plazo.

La importancia de Huaycán para Sendero a fines de los años ochenta llevó a una mayor represión por parte de las fuerzas del orden. Los militares y policías intensificaron sus rastrillajes y allanamientos luego de la marcha de 1988 y establecieron puntos de control en la región este de Lima.³⁷ El 18 de junio de 1989, aniversario de la masacre de los penales, militares y policías realizaron su mayor intervención en Huaycán. En ese momento, el Estado y Sendero convirtieron a Huaycán en un campo de batalla, y los dirigentes locales se vieron obligados a modificar su lucha por el control de su comunidad. El carácter combativo de los pobladores de Huaycán en los años ochenta logró proteger el proyecto de desarrollo progresivo y llevó a la consolidación de la autogestión en el asentamiento. Sin embargo, la creciente presencia de la insurgencia senderista y la contrainsurgencia estatal alienaron a la comunidad, menospreciando sus esfuerzos colectivos como “revisionistas” o “terroristas,” por lo que sus líderes, aferrándose a su autonomía, negociaron el papel de su comunidad en la lucha contra Sendero Luminoso.

36. Este fue el mismo Poppe que alguna vez fue propietario de las tierras de Huaycán.

37. “Fuerzas Armadas y policías en alerta”. *El Diario*, pp. 4-5. Lima, 10 de mayo de 1989.

El liderazgo de Pascuala Rosado y la formación de las rondas urbanas en Huaycán, 1991-1996

Al comenzar la nueva década, los pobladores de Huaycán se enfrentaron a rupturas en el tejido social de la comunidad. Las medidas de austeridad implementadas por el nuevo presidente, Alberto Fujimori, y la continua llegada de familias desplazadas hicieron evidentes las brechas socioeconómicas entre las áreas consolidadas y los nuevos asentamientos en las zonas marginales menos deseables. La victoria electoral de Fujimori en 1990 significó la derrota de los antiguos partidos políticos y evidenció la fragmentación de la IU. Una vez elegido, Fujimori dio marcha atrás a su rechazo a un *shock económico* y desplegó “medidas radicales de austeridad, reestructuración neoliberal y ‘reinserción’ en la comunidad internacional”.³⁸ El llamado Fujishock arrasó con los sectores marginales del país, que vieron el precio del pan y la leche triplicarse y el precio del gas para cocinar multiplicarse por 25.³⁹

En Huaycán, Sendero se alimentó del descontento entre los nuevos pobladores y socavó el trabajo de los dirigentes de las zonas establecidas. En los testimonios de la CVR y en mis entrevistas, los pobladores recordaron que Sendero logró controlar las partes altas del asentamiento, donde la electricidad, el agua y la seguridad eran escasas o inexistentes. Los senderistas aprovecharon la ausencia del Estado y llevaron a cabo campañas de intimidación dirigidas por “Luz,” una residente de Huaycán e integrante de la Célula de Dirección de la Zona Este de Sendero

38. El enfoque en la economía, por el lado de Fujimori, favoreció a las élites empresariales de Perú y a la comunidad internacional, quienes apoyaron el Consenso de Washington como una salida a la creciente deuda de América Latina (Burt 2009).

39. “Peru’s Poor Feel Hardship of ‘FujiShock’ Austerity”. James Brooke, *New York Times*, p. 15. Nueva York, 12 de agosto de 1990.

(Jiménez Bacca 2000: 556). Durante la noche aparecieron consignas en edificios públicos y privados (“Viva el PCP” o “Viva el Nuevo Poder”) seguidas por amenazas a quienes las borraran.

De acuerdo con la CVR, el reclutamiento más visible de Sendero en Huaycán se dio en la escuela Manuel González Prada, creada a principios de la década de 1990 (CVR 2003, V: 430). Informes de prensa de 1991 identificaron a la mayoría de los cuadros de Sendero en Huaycán como maestros, miembros del Movimiento Clasista Magisterial, una rama del Movimiento Revolucionario del Pueblo.⁴⁰ Uno de los fundadores de la escuela argumentó que el primer grupo de profesores eran jóvenes universitarios de La Cantuta, Villarreal y la Universidad Católica, sin afiliación senderista (CVR 2003, V: 431). Para algunos pobladores, fue la segunda ola de docentes que llegó de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, la Universidad del Centro y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes solicitaron trabajar en Huaycán y llevaron el discurso radical (CVR 2003, V: 431).⁴¹ El deseo de trabajar en Huaycán fue sospechoso para los pobladores que sabían que “nadie quería trabajar en el colegio, zona roja, zona peligrosa, y [...] el colegio estaba en esteras, estaba a tierra”.⁴² En 1991, los militares ingresaron a la escuela, donde arrestaron y reemplazaron a los maestros.

En el mismo año, la mayoría de las acciones senderistas ocurrieron en la región Lima Este; fueron 154 incidentes en comparación con los 92 de 1990 (CVR 2003, V: 50). La escala de represión policial en el asentamiento, al igual que la presencia creciente de Sendero en las asambleas, socavó el control de los dirigentes de izquierda en Huaycán. Parte de las acciones

40. “Sendero está en Huaycán”. Miguel Ramírez, *Oiga*, n.º 534: pp. 34-37. Lima, 13 de mayo de 1991.

41. Rey Magallanes y otros. CVR. Testimonio audio n.º 020401001000007.

42. Miguel Espejo. CVR, testimonio audio n.º 020401001000012.

involucraron la deslegitimación de los dirigentes, acusados de revisionismo (CVR 2003, V: 50). Sin embargo, un cable de inteligencia estadounidense reiteró que los intentos de Sendero para desarrollar sus bases en barrios marginales, lugares donde “la gente [está] en gran medida sin trabajo, electricidad, agua [...] [había] llegado a su límite”.⁴³ Los esfuerzos de los senderistas para abordar la demanda de vivienda y condiciones de vida dignas de la población urbana se limitaron a la realidad del conflicto armado y su incapacidad de negociar con el Estado.⁴⁴

El 5 de mayo de 1991, los pobladores de Huaycán, mediante elecciones universales, eligieron a Pascuala Rosado Cornejo como secretaria general de la CUAH. Ella se convirtió en la primera mujer en liderar Huaycán y la primera líder sin antecedentes políticos. Nacida en Cayma, Arequipa, Rosado llegó a Huaycán a mediados de la década de 1980, y participó en grupos locales de ayuda mutua y salud organizados por mujeres (CVR 2003, VII: 623). Madre de siete hijos y con solo educación primaria, enfrentó la crisis económica y vivió la precariedad alimenticia en Huaycán participando en comedores populares. Rosado formó parte del comité de electrificación de la zona A, y luego como su secretaria general logró que fuera electrificada. Su experiencia caracterizó el ingreso de las mujeres a la organización y el liderazgo comunitario a lo largo de la década de 1980.⁴⁵

El trabajo de Rosado y su falta de afiliación política la llevaron a ser elegida secretaria general bajo el lema “Huaycán unido

43. “Can the revolutionaries win in Peru? The case for Sendero Luminoso”. Cable de la Embajada de Estados Unidos, agosto de 1991.

44. Véase la trayectoria del proyecto senderista en Raucana en Abad 2022, Castillo 2006 y Luna-Victoria Indacochea 2022.

45. En la ciudad, “la participación de las mujeres en la construcción de nuevos barrios o terrenos baldíos invadidos por migrantes y ocupantes ilegales también las empujó a las esferas públicas de contacto y reivindicación” (Coral 1999: 338).

por el cambio". La propuesta de apoyar la candidatura de Rosado estuvo vinculada a su condición de mujer y madre, ya que en ese momento se necesitaba una figura no partidaria y asociada a "[...] la defensa de la vida y democracia" (Henríquez 2006: 51). Los dirigentes de IU en Huaycán utilizaron el liderazgo de una mujer como estrategia para contrarrestar la represión estatal en forma de rastrillajes, detenciones y la denominación "zona roja". Para Rosado y muchas dirigentes en este periodo, la prioridad durante su gestión se centró en mantener la autonomía de sus organizaciones, y así "[...] evitar [...] los conflictos partidarios" que caracterizaron a las directivas de la década de 1980 (Henríquez 2006: 50). Así, la victoria de Rosado también marcó el quiebre de la tolerancia previa respecto de Sendero y el MRTA, ya que en los años ochenta eran vistos como parte del conglomerado de las agrupaciones de la izquierda radical.

La nueva junta directiva propuso obras públicas para contrarrestar la influencia de Sendero. "Tuvimos que acabar con la conciliación y luchar para cambiar la imagen de Huaycán", declaró Pedro Arévalo, miembro de la junta directiva (Arévalo 1997: 72). Rosado comenzó a referirse a Huaycán como "La Ciudad de la Esperanza", nombre propuesto por la parroquia de San Andrés para contrastar con la denominación de "zona roja". Al no tener un pasado político, Rosado creó una gama de alianzas políticas y comunitarias durante su mandato. Su directiva estuvo además influida por su afiliación a dos importantes instituciones de la década: el Instituto Libertad y Democracia (ILD), dirigido por el economista Hernando de Soto, y un colectivo de ciudadanos franceses de Toulouse (Arévalo 1997: 70-71). La junta directiva también creó talleres para promover el espíritu empresarial y el comercio dentro de la comunidad. Por lo tanto, los dirigentes se comprometieron con organizaciones privadas, ONG y el Estado. No obstante, estas alianzas convirtieron a todos los involucrados en posibles blancos de Sendero.

Fueron la Iglesia católica y las ONG, no los partidos políticos, quienes apoyaron el trabajo de las mujeres en dirigencias y organizaciones (CVR 2003, III: 368). La Iglesia jugó un papel importante en el desarrollo de Huaycán desde su creación con el apoyo de las parroquias cercanas en Santa Anita, Ate-Vitarite y Santa Clara. La parroquia de Huaycán, bajo el liderazgo del padre Tadeo Pasini, “canalizó una ayuda sustancial de [la] congregación Monfort”.⁴⁶ Además, la Iglesia creó programas de asistencia social administrados por la organización Caritas, una iniciativa de Usaid (Chávez Achong 2000: 94). El asesinato de Zacharias Magallanes, miembro de la ONG de desarrollo urbano y empresarial Ideas, fue el primer asesinato selectivo en contra de un trabajador de una ONG en Huaycán y Lima. El atentado fue parte de la escala de acciones senderistas que buscó eliminar a los principales dirigentes de base en los asentamientos de Lima.

El presidente Fujimori asumió el desarrollo de Huaycán desde su campaña electoral y lo utilizó como un desafío para demostrar su compromiso con su base y desplegar la guerra de baja intensidad. Sus visitas crearon proximidad con los dirigentes de Huaycán, y para muchos su victoria simbolizó la renovación política, el cambio y el fin del poder de una élite conservadora tanto de derecha como de izquierda (Arévalo 1997: 71). Fujimori estableció su papel como benefactor y ayudó a realizar varios de los proyectos en curso de la junta directiva. No obstante, quiso lograr más que obras en Huaycán. La guerra de baja intensidad en los barrios marginales de Lima comprendió cuatro etapas: el despliegue de campañas cívico-militares, la instalación de una base militar, la organización de rondas urbanas y la creación de una comisaría permanente. En Huaycán, la primera se inició en 1991 con varias incursiones militares en el

46. Los padres Adrián Tomasi y Jorge Anzonera también brindaron apoyo fundamental y ayuda internacional a la comunidad cristiana de Huaycán (Arévalo 1997: 7).

asentamiento. Soldados distribuyeron comida y tocaron música para los pobladores mientras registraban sus casas y arrestaban a personas sospechosas. A fines de 1991, los militares habían instalado su primera base contrainsurgente en la zona arqueológica de Huaycán (Castillo 2006: 203).

Testimonios brindados a la CVR destacan la violencia física que sufrió la población de Huaycán, incluyendo la detención arbitraria, el allanamiento en horas de la madrugada y la detención a jóvenes sin identificación.⁴⁷ Estos sucesos revelaron una creciente desconfianza entre los pobladores y los soldados. El régimen de Fujimori, a través del mando de las Fuerzas Armadas, socavó el trabajo de base de los partidos políticos. Los militares asumían que los senderistas habían infiltrado las asociaciones locales y sospechaban de dirigentes y organizaciones simplemente por tener políticas de izquierda. La contrainsurgencia se propuso neutralizar a Huaycán; esto significó la eliminación de la oposición política a través de la represión.

En la tercera fase de la guerra de baja intensidad y estrategia urbana, las rondas urbanas fueron concebidas en relación con las ya existentes rondas campesinas formadas en las comunidades rurales. No obstante, en la capital ya existían comités de autodefensa en los asentamientos humanos desde mediados del siglo XX. Creados por migrantes andinos en las periferias de Lima, fueron respuestas de base al abandono estatal; sin embargo, nunca le habían declarado la guerra a Sendero.

Desde la ocupación del terreno de Huaycán el 15 de julio de 1984, los pobladores organizaron un comité de autodefensa encargado de resguardar el territorio. Al frente del comité estaba el dirigente David Porras, quien permaneció a cargo durante los primeros años de Huaycán. El enfrentamiento con Patria Roja en 1984 reforzó la necesidad del frente de autodefensa de

47. Guadalupe Álvarez Huamán. CVR, testimonio n.º 020401000008.

salvaguardar la planificación urbana establecida por el equipo técnico. El comité de autodefensa se ocupó de proporcionar la seguridad en Huaycán durante los años ochenta y principios de los noventa, y fue compuesto por dos ramas: un equipo de seguridad con su autodefensa, administrada por cada campamento (posteriormente UCV), y los grupos operativos que funcionaban en el ámbito comunitario más amplio.⁴⁸

Los grupos de autodefensa patrullaban su campamento y vigilaban a extraños o actividades ilícitas, incluyendo el contrabando de alcohol o robos. Cada campamento designó a un secretario de seguridad y autodefensa, y rotaban los turnos de patrullaje entre vecinos. La participación era obligatoria bajo la consigna “toda la gente para tener terreno tenía que hacer su guardia”.⁴⁹ Los grupos de trabajo rotaban diariamente, lo que permitió que los residentes cumpliesen con su función en los comités además de su labor doméstica o trabajo fuera de Huaycán. Dado que la mayoría de los pobladores debían salir a trabajar, estos grupos de autodefensa protegían sus objetos de valor, que incluían ropas y radios. “Acá había ladrones, pero los ladrones sabían que no tenían que robar aquí, tenían que robar en otros sitios”, recordó Lastra.⁵⁰ Estos grupos también escoltaban por las noches a mujeres y niños desde las paradas de autobús hasta sus hogares. Los grupos de autodefensa dentro de cada campamento brindaron seguridad, y algunos de sus miembros cargaban armas de fuego. De esta manera, el primer comité de autodefensa de Huaycán “nunca ha tenido [...] que ver con terrorismo ni violencia”.⁵¹

48. David Porras. Entrevista con la autora. Lima, 20 de diciembre de 2019.

49. Ibíd.

50. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 7 de diciembre de 2019.

51. David Porras. Entrevista con la autora. Lima, 20 de diciembre de 2019.

Los grupos operativos, conocidos como “comandos”, bajo la supervisión de Porras y otros dos miembros de la dirección central, eran elegidos en asambleas populares. Día y noche los comandos confiscaron alcohol, abordaron la violencia doméstica, recopilaron inteligencia y aplicaron castigos. Las mujeres también formaron parte de los comités de autodefensa y comandos, y constituyan la mayor parte de los grupos de autodefensa. Su papel no solo quedó relegado a las labores domésticas, como cuidar a sus hijos y su hogar. Ellas también garantizaban la seguridad del campamento, y el comité de autodefensa dependió de los comedores populares, dirigidos por mujeres, para alimentar a sus voluntarios.

El gobierno de Fujimori reconoció la importancia de combatir la presencia subversiva en Huaycán sistemáticamente con la ayuda de los comités de autodefensa, y empezó a proveer apoyo a sus miembros, otorgándoles alimentos a cambio de su trabajo.⁵² El presidente del comité electoral de Huaycán, Walter Rojas, percibió que el verdadero deseo del presidente era “crear un enorme ejército civil contra la subversión”.⁵³ Las intenciones de Fujimori se hicieron claras tras los decretos legislativos 740 y 741, que subordinaron los comités de autodefensa a las Fuerzas Armadas en regiones declaradas en emergencia.⁵⁴

El 23 de febrero de 1992, Pascuala Rosado contempló la creación de rondas urbanas en un programa de televisión.⁵⁵ En

52. Ibíd.

53. “Sendero está en Huaycán”. Miguel Ramírez, *Oiga*, n.º 534: 37. Lima, 13 de mayo de 1991.

54. Decreto Legislativo n.º 741, “Reconocen a Comités de Autodefensa como organizaciones de la población para desarrollar actividades de autodefensa de su comunidad” (Lima, 8 de noviembre de 1991); y Decreto Legislativo n.º 740, “Norman la posesión y uso de armas por las Rondas Campesinas” (Lima, 8 de noviembre de 1991).

55. “Rondas urbanas against Sendero”. Memo de la Embajada de Estados Unidos (marzo de 1992).

su aparición, Rosado promovió los comités de autodefensa urbanos autónomos y la necesidad de que estos mantuvieran su legitimidad dentro de su comunidad. El reciente asesinato de la teniente-alcaldesa de Villa El Salvador, María Elena Moyano, ejemplificó el peligro que representaba desafiar abiertamente a Sendero, particularmente el desafío de mujeres dirigentes, y expuso una estrategia senderista para manipular los vacíos de poder en las dirigencias locales. La legitimidad creada por dirigentes femeninas, desde la preocupación por la alimentación hasta su influencia como creadoras de opinión pública, no podía coexistir con la estrategia de Sendero (Henríquez 2006: 48-49). A pesar del riesgo para su vida, Rosado entendió que jugaría un papel definitivo para frenar los avances subversivos.

Desde la instalación de la base militar en Huaycán, en noviembre de 1991, el mayor impulsor de las rondas urbanas subordinadas a las Fuerzas Armadas fue el general Pérez Documet, quien fue designado como jefe de la Primera División de Fuerzas Especiales a cargo de combatir la contrainsurgencia en las regiones Sur y Este de Lima en 1992. Anteriormente, estuvo en el Frente Mantaro, donde promovió que las rondas campesinas se armaran. El general justificó esta medida para combatir a Sendero, y aplicó la misma estrategia de armar a las rondas en la ciudad. En Huaycán, los decretos legislativos 740 y 741 subordinaron el comité de autodefensa a la base militar. El general justificó su apropiación de los comités tras publicarse en 1992 la tesis de los coronel Arturo Rodríguez, Antonio Padilla y el arquitecto Emilio Ponce, titulada “Unidad experimental modelo para la formación de cuerpos de autodefensa”. El estudio, realizado con la ayuda de los dirigentes de Huaycán, utilizó al comité de autodefensa existente como modelo para eliminar a las fuerzas subversivas a través de la constrainteligencia (Tapia 1995: 15). A pesar de los hallazgos del estudio, que reforzaban la importancia del control comunitario de los comités, Pérez Documet impuso su completa subordinación a los militares.

En julio de 1992, tres meses después del golpe del 5 de abril, Fujimori anunció la creación de las rondas urbanas de Huaycán como parte de su nueva estrategia de contrainsurgencia encargada al general Pérez Documet. La declaración fue un duro golpe para los dirigentes, en especial para Rosado, quien manifestó a los medios que las palabras del presidente parecieron una “cachetada”.⁵⁶ Hasta ese momento, Rosado mantuvo su posición de defender la autonomía de los comités de autodefensa. Luis Chávez Rivas, jefe del comité de autodefensa de Huaycán, proclamó: “Nosotros no podemos ser carne de cañón del Estado ni de Sendero Luminoso: nuestra lucha más bien es política que militar”.⁵⁷ Los comités de autodefensa priorizaban la seguridad comunal, preocupándose de delitos menores como la prostitución, la corrupción y la violencia doméstica. La abrupta declaración del presidente llevó a que muchos voluntarios renunciaran a sus puestos.⁵⁸ En adelante, las rondas urbanas transformaron a los comités de autodefensa en milicias subordinadas a la base militar y los ronderos estarían a cargo de proporcionar inteligencia acerca de posibles subversivos en la comunidad.

La creación de las rondas urbanas propició fricciones entre los dirigentes de Huaycán, y muchos culparon a Rosado por venderse al régimen de Fujimori. Un dirigente recordó la presión que tenía la junta directiva por parte del Estado: “Ahí parece que obligaron a ciertos dirigentes a ser parte de todo eso. La exigencia tal vez ha sido con parte de la condicionalidad de te doy obras, de represión, dame nombres o permíteme hacer esto”.⁵⁹ Igualmente, Rosado y la junta directiva recibieron

56. “Engaño en Huaycán”. *Caretas*, pp. 33-37. Lima, 20 de julio de 1992.

57. Ibíd., p. 34.

58. Ibíd., pp. 33-37.

59. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 18 de enero de 2020.

amenazas de Sendero en forma de notas o murmullos en las calles (Butteler 1997: cap. 10). Sin embargo, Rosado sabía que proporcionar obras públicas sería clave para recuperar la confianza de la comunidad y así enfrentar a los insurgentes. Por tal razón, ella y la junta directiva se reunieron con los militares, trabajando también con el exsenador de IU Carlos Tapia como intermediario para establecer ciertos términos respecto del control de Huaycán. “En esas reuniones [...] nosotros no íbamos solos [...] [Pérez Documet] ya sabía, no éramos gente novata [...] teníamos experiencia política, [...] de todas maneras tenía que dialogar y se lograba algo”, recordó Arévalo.⁶⁰ Si no establecían un diálogo, los dirigentes temían que el Ejército entrara a Huaycán sin restricciones. Por lo tanto, negociaron con los militares con la expectativa de salvaguardar sus organizaciones comunales.

El costo del control militar de las rondas urbanas en Huaycán implicó la creación de un trabajo de inteligencia entre dirigentes y pobladores, el cual se sirvió del conocimiento de los dirigentes acerca de quiénes eran subversivos en Huaycán y quiénes entre ellos representaban verdaderas amenazas. “Los únicos que sabíamos quiénes son y quiénes no son de Sendero, o eran de MRTA o de otro partido, somos nosotros. [...] los únicos que podíamos hacer una labor de inteligencia efectiva éramos nosotros [...] aparte conocíamos la trayectoria, como éramos también de izquierda”, dijo Arévalo.⁶¹ Los dirigentes tenían que decidir si denunciar o tolerar a los subversivos, sabiendo que no existían garantías sobre la seguridad de los detenidos. La etapa final de la estrategia de contrainsurgencia urbana culminó con la construcción de la comisaría, que también fue una iniciativa

60. Pedro Arévalo. Entrevista con la autora. Zoom, 11 de febrero de 2021.

61. Ibid.

de Rosado y su junta directiva como una forma de llevar al Estado a Huaycán.

Huaycán sirvió como un laboratorio de la contrainsurgencia en donde Fujimori creó la percepción de un frente urbano cohesivo contra Sendero. El interés del presidente por las rondas urbanas, sin embargo, se disipó después de la captura de Abimael Guzmán en septiembre de 1992. Los dirigentes recordaron que el gobierno abandonó a su suerte a las rondas cuando dejó de proporcionar alimentos a los miembros del comité de autodefensa a través del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria-Pronaa (Butteler 1997: cap. 10). Esta medida significó una traición a los dirigentes que confrontaron políticamente a Sendero, y los dejó vulnerables a ataques senderistas. Rosado y su junta directiva adoptaron estilos de vida clandestinos: nunca dormían en la misma casa y evitaban cualquier horario rutinario. Los dirigentes también se enfrentaron al Ejército, que incrementó su represión en contra de los dirigentes que desaprobaban al gobierno. Los militares encontraron una lista de presuntos líderes de Sendero en Huaycán en la computadora de Guzmán, la cual incluía los nombres de Pascuala Rosado y su junta directiva (Arévalo 1997: 76). Después se sabría que la lista nombraba víctimas de futuros asesinatos, no de insurgentes (Arévalo 1997: 76).

Los senderistas que seguían operando dentro de Huaycán luego de la captura de Guzmán en 1992 se enfocaron en eliminar a los dirigentes locales y a los miembros de los comités de autodefensa. El primer asesinato selectivo contra los ronderos fue el de Miguel Galindo Cabezas, seguido por una emboscada al local communal del comité de autodefensa, donde murió el rondero Erasmo Flores Arias.⁶² Un tercer asesinato selectivo

62. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 7 de diciembre de 2019. CVR, caso n.º 1007295, testimonio n.º 101346.

en 1994 involucró al rondero y dirigente David Alberto Chacalazá.⁶³ Rosado también recibió amenazas, y Sendero intentó asesinarla junto a sus hijos en abril de 1993.⁶⁴ Temiendo por su vida, Rosado partió al exilio en Chile con la ayuda de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Alta Comisión para los Refugiados de las Naciones Unidas (Arévalo 1997: 75). Al retirarse el apoyo del Estado, Sendero logró desmantelar el liderazgo central de Huaycán.

Después de refugiarse en Chile, Rosado regresó a Perú, y en diciembre de 1995 volvió a su casa e hijos en Huaycán. En lugar de reinsertarse en la dirigencia de Huaycán, optó por mantener económicamente a su familia trabajando en la fábrica textil Textimax. No obstante, Rosado “se sintió vigilada”, y pidió seguridad a la policía en varias ocasiones, pero sin éxito.⁶⁵ Su preocupación culminó cuando Sendero la asesinó el 6 de marzo de 1996. Ese día, Rosado caminaba frente al mercado de la avenida Comercial de Huaycán cuando sujetos encapuchados se acercaron y le dispararon dos tiros en la cabeza. Los asesinos dejaron volantes de propaganda y detonaron un pequeño cartucho de dinamita en su cuerpo. Los pobladores de Huaycán enterraron a Rosado junto a Rafael Flores Echevarría, el mártir de la marcha de 1988. El ataúd de Rosado fue escoltado por pobladores, senadores, miembros de ONG y el ministro de la Presidencia, Jaime Yoshiyama Tanaka.⁶⁶

El asesinato de Rosado resucitó los debates sobre la presencia de Sendero y el MRTA en los asentamientos humanos de Lima y la responsabilidad del gobierno de proteger a los dirigentes

63. Dircote, PNP, 1995, atestado 15, atestados 13-18, tomo 2.

64. Acta de denuncia, Policía Nacional del Perú, Santa Clara (26 de abril de 1993). CVR, testimonio n.º 102143.

65. Flavio Fryland Olazabal Salinas. CVR, testimonio n.º 102143.

66. “Seguiremos tu lucha contra la violencia ciega”. *La República*, p. 11. Lima, 8 de marzo de 1996.

locales. Los medios cubrieron la muerte de Rosado ampliamente y denunciaron la barbarie de Sendero. La muerte anunciada estremeció a los dirigentes de Huaycán, ya que seguían siendo posibles blancos de Sendero. Entre los volantes senderistas que quedaron junto al cuerpo de Rosado había una lista de 14 nombres, incluida la junta directiva de Rosado.⁶⁷ La amenaza forzó a Arévalo a buscar exilio en Noruega.⁶⁸ La embajada de Estados Unidos también les ofreció asilo en Noruega a otros dirigentes de la junta directiva, de los cuales solo Javier Ramos Figueroa y su esposa, la arquitecta María Estrada, aceptaron la oferta.⁶⁹ La policía arrestó a los responsables del asesinato entre 1996 y 1998: Glicerio Aguirre Pacheco, acusado de planear el asesinato, y el compañero “Felipe,” ambos miembros de un escuadrón de aniquilamiento de Sendero.⁷⁰ En Huaycán, el asesinato de Rosado alimentó el miedo a Sendero y relativizó sus logros. Con su muerte, ocurrida cerca de cuatro años desde que se crearan las rondas urbanas, concluyó la venganza senderista de eliminar a la directiva huaycanense que logró arrebatarles el apoyo popular.

Epílogo: la memoria de la resistencia

La dirigencia de Pascuala Rosado ha sido celebrada y resignificada desde que comenzó su mandato en 1991 hasta el presente. La construcción de su memoria sigue el modelo examinado por Jo-Marie Burt en el caso de María Elena Moyano. Burt describe la apropiación de la memoria de Moyano como “víctima

67. Congreso de la República, Comisión de Derechos Humanos y Pacificación (20 de marzo de 1996). CVR, caso n.º 102143: 4.

68. Pedro Arévalo. Entrevista con la autora. Zoom, 11 de febrero de 2021.

69. Ibíd.

70. Consejo Supremo de Justicia Militar, n.º 012-TP-98-L (30 de septiembre de 1998).

emblemática” de Sendero y analiza cómo el gobierno fujimorista, Sendero Luminoso y la IU lo hicieron para validar sus ideologías divergentes (Burt 2011: 71). En el caso de Pascuala Rosado, el Estado y Sendero adoptaron los mismos métodos en relación con Moyano para narrar el legado de su dirigencia. En Huaycán, la memoria de Rosado y su junta directiva permanece dividida entre los que admiraron su confrontación con Sendero y aquellos que interpretaron su lucha como un error que finalmente resultó en su muerte.

A diferencia de Moyano, quien fue asesinada durante el re-crudecimiento de las acciones senderistas en la capital, Rosado fue asesinada luego de la captura de Guzmán, y el gobierno fujimorista se apropió de su figura como mujer, madre y víctima de Sendero para legitimar su régimen. Sin embargo, durante la dirigencia de Rosado, el régimen fujimorista forzó su colaboración y la de su junta al proclamar la creación de las rondas urbanas contra Sendero sin tomar en cuenta su estrategia para combatir la insurgencia políticamente. Como en el caso de Moyano, Sendero acusó a Rosado de ser una “agente del Estado” y del “revisionismo”, con lo que buscó deslegitimar a las dirigentes de base acusándolas de corrupción e incitando la desconfianza entre los pobladores. Esta labor dio fruto dentro de Huaycán, ya que muchos pobladores se reusaron a condenar a Sendero después del asesinato. Los testimonios brindados a la CVR entre 2002 y 2003 revelaron que muchos pobladores seguían pensando que el asesinato pudo ser justificado, “por algo habrá sido” (Henríquez 2006: 53).

Los medios y el resto de la sociedad limeña condenaron el asesinato y elevaron a Rosado como figura de la resistencia a Sendero, cuya muerte fue atribuida a la falta de protección del Estado. Como en el caso de Moyano, la imagen principal de Rosado en los medios nacionales e internacionales fue la de una mártir que dio su vida en la lucha contra los subversivos (Burt 2011: 75). Sin embargo, Rosado nunca militó en los partidos de

izquierda como lo hizo Moyano, y como consecuencia su militancia no fue ocultada por los medios ni el gobierno fujimorista. En el periodo del posconflicto, Rosado ha sido recordada en el *Informe final* de la CVR al igual que en el Lugar de la Memoria, Tolerancia e Inclusión Social. En el escenario nacional, es una figura que representa la lucha contra Sendero desde las bases. Poco se comenta de las divergencias de Rosado y su junta con el general Pérez Documet, la presencia de la base militar y el control de las rondas urbanas. Las negociaciones de Rosado con las Fuerzas Armadas han sido omitidas de la memoria oficial, formando parte de lo que Burt llama la “dicotomía” que facilitó ubicar a Moyano (y Rosado en este caso) como una aliada del Estado contra Sendero (Burt 2011: 75, 77).

En Huaycán, la memoria de Pascuala Rosado es controvertida. Muchos la celebran como mártir de la comunidad, y desde 1998 existe un monumento con el nombre de Rosado en la plaza central; pero prevalecen opiniones discrepantes, como lo expresó un dirigente en 2019: “Las personas que han hecho políticas de colaboración con el gobierno, incluso menoscabando la organización comunal, los elevan como héroes”.⁷¹ Para muchos, el resultado de esta alianza fue el asesinato de Rosado y la disolución de su directiva. “Según Sendero, [ellos tenían] una deuda de sangre. Según ellos, porque a raíz de [la creación de las rondas] parece que habían caído muchos”, recordó Porras.⁷² No obstante, para los dirigentes de la junta directiva de Rosado, la colaboración con el Estado fue una estrategia crucial para proteger a Huaycán. Arévalo recordó que “[...] teníamos ese problema de ver todas las posibilidades de mejora para nosotros”.⁷³ Rosado no solo logró la victoria política sobre Sendero en las

71. Charles Jaime Lastra Domínguez. Entrevista con la autora. Lima, 7 de diciembre de 2019.

72. David Porras. Entrevista con la autora. Lima, 3 de diciembre de 2019.

73. Pedro Arévalo. Entrevista con la autora. Zoom, 11 de febrero de 2021.

elecciones de 1991, sino que también disminuyó su influencia en Huaycán a través de obras públicas. Al trabajar con Fujimori, los dirigentes no buscaron clientelismo, sino construir sus proyectos y su legitimidad. Consiguieron así los estudios técnicos y la financiación a través de conexiones con la Iglesia y las ONG (Arévalo 1997: 74). La dirigencia de Rosado abordó las demandas inmediatas de la población de Huaycán en el periodo del conflicto; demandas que fueron exasperadas por el Fujishock y la epidemia de cólera.

La trayectoria del pueblo de Huaycán y las experiencias de sus dirigentes señalan que, en la ciudad, los senderistas se enfrentaron a comunidades politizadas que hicieron propuestas y demandas a las que los insurgentes no pudieron responder significativamente. El rápido crecimiento de la población limeña —en parte por las consecuencias del propio conflicto, que forzó a miles de familias a desplazarse de la sierra a las periferias de la ciudad— contribuyó a la expansión descontrolada de comunidades como Huaycán, en las cuales la heterogeneidad de los residentes y sus exigencias quedaron fuera del alcance de Sendero. Este crecimiento urbano fue en parte lo que promovió la creación de Raucana en 1990, el único Comité Popular Abierto en Lima y modelo de escala pequeña que sí logró ser controlado por Sendero. Los dirigentes de Huaycán lucharon constantemente por su legitimidad como líderes ante los pobladores, y sus acciones evidencian la colaboración con los partidos políticos, el gobierno y organizaciones sin fines de lucro para mejorar la calidad de vida de su comunidad. Igualmente, el caso de Huaycán revela las negociaciones de los dirigentes con las Fuerzas Armadas que penetraron en los asentamientos humanos en los años noventa, así como sus consecuencias en aquellos que se propusieron trabajar con el Ejército como estrategia para mantener el control de la comunidad; consecuencias que tuvieron un alto costo en vidas humanas y un alto costo social pagado por una generación de dirigentes.